

DICIEMBRE 29 DE 1932

84ª REUNION — 10ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDENCIA DE LOS DOCTORES JUAN F. CAFFERATA, HECTOR S. LOPEZ
Y AUGUSTO BUNGE

DIPUTADOS PRESENTES: Abalos Próspero, Acosta Abel, Albarracín Belisario, Alonso Alfredo J., Amadeo y Videla Daniel, Amodeo Aurelio F., Andreis Fernando de, Aráoz Ernesto M., Argonz Joaquín, Bermúdez Manuel A., Biancofiore Rafael, Bosano Ansaldo Daniel, Bruchou Eduardo, Bunge Augusto, Bustillo José M., Cafferata Juan F., Cárcano Miguel Ángel, Carreras Ernesto L. de las, Castiglioni Eduardo, Castro Felipe, Contte José A., Cornejo Arias Víctor, Coronel Carlos, Cortés Arteaga Alberto, Costa Méndez Nicanor, Dávila Miguel V., Duhau Luis, Escobar Adrián C., Espil Alberto, Fernández Damián, Fresco Manuel A., Frías Silva Raúl, Giusti Roberto F., Godoy Raúl, Gómez Hernán F., González Benjamín S., González Guerrero Manuel, González Maseda Manuel, Grisolia Luis, Groppo Pedro, Guglielmelli Aquiles M., Herraíz Pascual, Lazo Plácido C., López Héctor S., Loyarte Ramón G., Maglione Francisco I., Manacorda Carlos, Martínez Erasmo, Martínez José Heriberto, Messone Ricardo N., Morrogh Bernard Juan F., Moussa Eduardo, Moyano Rodolfo, Noble Roberto J., Ortiz Basualdo Samuel, Palacio Benjamín, Palisa Mujica Arturo, Parodi Misael J., Pereira Clodomiro, Pinedo Federico, Pintos Angel, Pueyrredón Carlos A., Quiroga Félix, Radío Pedro, Rodríguez Pinto Domingo, Rojas Marcos E., Ruiz Guinazú Jacinto, Saggese Angel, Salas José Raquel, Salcedo Saturnino, Santillán Enrique, Schoo Lastra Dionisio, Sierra Bernardo, Simón Padrós Juan, Solís Rogelio J., Speroni Daniel C., Spinetto Alfredo L., Taboada Mora Cipriano, Tourrés León P., Uriburu Francisco, Vega Abraham de la, Vicchi Adolfo A., Vignart Uberto F., Zalazar Altamira Benjamín, Zarazaga Marcial J., Zerda Justiniano de la: AUSENTES, CON LICENCIA: Bordabehere Enzo, Calderón Osvaldo M., Carús Agustín J., Corominas Segura Rodolfo, Costanti Gerardo, González Valentín, Moreira Alejandro E.; CON AVISO: Aguirrezabala Miguel A., Aráoz José Ignacio, Courel Carlos D., Ferreira Antenor R., Garayalde José María, Luján Abdón P., Mosset Iturraspe Mario; SIN AVISO: Agüero Santos, Ahumada Luis Alberto, Antelo Mario, Becerra Eugenio A. (h.), Besasso Domingo, Bogliolo Rómulo, Briuolo Miguel, Buira Demetrio, Buyán Marcelino, Carreras José, Castellanos José D., Castiñeiras Alejandro, Colombes Carlos G., Dickmann Adolfo, Dickmann Enrique, Ganza Marcelino, Ghioldi Américo, Giménez Angel M., Harispe Albino H., Herrera Bruno J., Inda Rufino, Iribarne Alberto, Lamesa Juan B., Lima Vicente Solano, Loredó José, Magris Amleto, Mancini Rafael, Martella Julio C., Mattos Luis María, Mayo Ramón, Molina Serapio, Moret Carlos (h.), Mouchet Enrique, Navello Miguel B., Nigro Juan, Noble Julio A., Oddone Jacinto, Palacín José, Palacín Manuel, Palacín Pedro, Palmeiro José, Parera Gregorio, Pascarelli Miguel, Pena José Luis, Pérez Leirós Francisco, Pfeleger José E., Pietranera Bruno J., Pomponio Vicente E., Pressacco Juan P., Repetto Nicolás, Rocha Arturo da, Ruggieri Silvio L., Sellarés Avelino, Solari Juan Antonio, Vidal Baigorri José, Vionnet Rodolfo L.

SUMARIO

- 1.—Manifestaciones en minoría.
- 2.—Sesión en mayoría. Acta.
- 3.—Asuntos entrados:

- I.—Despacho de comisión.
- II.—Peticiones particulares.
- III.—Proyecto de ley del señor diputado Sierra y otros, creando el Registro Nacional de Identificación.
- IV.—Proyecto de ley de los señores diputados Cafferata y Martínez (J. H.), incluyendo en los beneficios de la ley número 11.175 al personal permanente de las compañías de seguros.

V.—Telegramas de senadores y diputados y del señor presidente de la República de Chile, solicitando la sanción del proyecto de ley sobre ferrocarril de Salta a Antofagasta.

- 4.—Concédese licencia para faltar a sesiones al señor diputado Calderón.
- 5.—Termina la consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley sobre impuesto a los réditos.
- 6.—Moción del señor diputado Palisa Mujica acordando preferencia al despacho sobre emisión de títulos para financiar la obra ferroviaria de «El Volcán». Es aprobada.

7.—A indicación del señor diputado **Martínez (J. H.)**, se resuelve pasar a la orden del día.

8.—Consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley sobre administración, percepción y procedimiento en materia de impuestos a los réditos y a las transacciones.

9.—Moción del señor diputado **Escobar** para que se comuniquen de inmediato las sanciones al Honorable Senado.

10.—Consideración de los despachos de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre impuestos a los réditos y a las transacciones y reducción de la tarifa de impresos certificados.

11.—Consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre modificación de la ley de papel sellado.

12.—Consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre aplicación del derecho adicional del diez por ciento a la importación de yerba mate y excepción para las mercaderías eximidas de derecho.

13.—Moción del señor diputado **Martínez (J. H.)** para considerar sobre tablas el despacho de la Comisión de Presupuesto en el proyecto de ley sobre crédito suplementario al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública para el pago de sueldos correspondientes a ejercicios vencidos.

14.—Consideración del despacho a que se refiere el número anterior.

15.—A moción del señor diputado **Duhau**, se considera el proyecto de ley autorizando a la Comisión Especial de Reformas a la Ley de Aduana para designar un empleado.

16.—Moción del señor diputado **Messone** para considerar de inmediato el despacho de las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Obras Públicas sobre terminación del ferrocarril de Salta a Socompa. Es aprobada.

17.—Consideración del despacho a que se refiere el número anterior.

—En Buenos Aires, a veintinueve de Diciembre de 1932, siendo la hora 16:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. de la Vega. — Desearía saber si hay posibilidad de conseguir quórum.

Sr. Presidente (Cafferata). — Hasta este momento no hay número suficiente en la casa.

Sr. Groppo. — Propongo que se espere un cuarto de hora más.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Cafferata). — Como hay asentimiento, se esperará conforme lo propone el señor diputado.

2

ACTA

—A la hora 16 y 11:

Sr. Presidente (Cafferata). — Queda abierta la sesión con la presencia de 80 señores diputados.

—Por indicación del señor diputado Fresco se suprime la lectura del acta y se da por aprobada.

3

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Cafferata). — Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

I

Despacho de comisión

PRESUPUESTO Y HACIENDA:

En el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre administración percepción y procedimiento en materia de los impuestos a los réditos y a las transacciones.

—A la orden del día.

II

Peticiones particulares

La Asociación Comercial e Industrial de Morón formula observaciones relacionadas con

Sr. Pinedo. — Cuando el gobierno federal establece un impuesto que grava a todos, el primer deber de los gobiernos de provincia es hacer que se cumpla la ley nacional.

Sr. Gómez. — Los principios institucionales que nos rigen son perfectamente claros y apoyan mi actitud.

Sr. Presidente (Cafferata). — Se va a votar la moción de reconsideración respecto al artículo 29.

—Se vota y resulta negativa.

Sr. Gómez. — Que quede constancia de mi voto en contra.

Sr. Presidente (Cafferata). — Se dejará constancia.

No haciéndose más observaciones, queda sancionado el proyecto.

6

MOCION

Sr. Palisa Mujica. — Pido la palabra para hacer una moción de preferencia.

Hago indicación para que una vez que la Cámara se haya ocupado de los elevadores de granos, carne y al ferrocarril de Salta a Socompa, entre de inmediato a considerar la orden del día número 97, sobre un proyecto de ley, en revisión, relativo a emisión de títulos de renta de obras públicas para financiar la obra ferroviaria de «El Volcán» y sus complementos.

Por otra parte, se trata de un despacho que ya tiene sanción del Senado y que insumirá poco tiempo a la Cámara.

Sr. Presidente (Cafferata). — En consideración la moción de preferencia formulada por el señor diputado por Jujuy respecto a la orden del día número 97.

—No haciéndose observación, se vota y aprueba la moción de preferencia formulada.

7

INDICACION

Sr. Pueyrredón. — Pido la palabra.

Sr. Martínez (J. H.). — Hago moción de que se pase a la orden del día.

Sr. Pueyrredón. — Sólo dos minutos emplearé.

Sr. Martínez (J. H.). — Aunque fuese un minuto. Insisto en mi moción.

Sr. Presidente (Cafferata). — La Presidencia está obligada a poner a votación la moción de pasar a la orden del día formulada por el señor diputado por Córdoba.

Sr. Pinedo. — Hay que tener paciencia. Asuntos tan serios como el presupuesto y las leyes de impuestos deben merecer mayor atención de parte de los señores diputados.

Sr. Pueyrredón. — Yo sólo quiero pedir que la Cámara dé entrada a un despacho. Se trata de un mensaje y proyecto del Poder Ejecutivo sobre plan de construcciones en los Ferrocarriles del Estado, proyecto cuya sanción es urgentísima porque de lo contrario quedarán en la calle miles de empleados. Este proyecto pasó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes que presido, fué despachado favorablemente y falta que la Cámara autorice a que se subsane el error de haberlo destinado también a la Comisión de Presupuesto.

Sr. Escobar. — Que se autorice a darle entrada.

Sr. Pueyrredón. — Si la Cámara aceptase, el despacho tendría entrada.

Sr. Pinedo. — No podemos hacerlo ahora.

Sr. Martínez (J. H.). — He hecho moción de pasar a la orden del día, que es previa.

Sr. Presidente (Cafferata). — Se va a votar si se pasa a la orden del día.

—Resulta afirmativa.

8

IMPUESTOS A LOS REDITOS Y A LAS TRANSACCIONES

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha estudiado el mensaje y proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre administración, percepción y procedimiento en materia de los impuestos a los réditos y a las transacciones; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

CAPITULO I

De las autoridades administrativas de los impuestos

Artículo 1º — En las cuestiones referentes a los impuestos a los réditos y a las transacciones, intervendrán las siguientes autoridades: una «Dirección General de los Impuestos a los Réditos y a las Transacciones», una «Comisión Honoraria del Impuesto a los Réditos», una «Comisión Honoraria del Impuesto a las Transacciones» y las «Comisiones Auxiliares» que creará la Dirección.

Dirección General

Consejo

Art. 2º — La Dirección tendrá a su cargo el mecanismo, aplicación y percepción de los gravámenes y será dirigida por un Consejo compuesto de cinco miembros nombrados por decreto, cuyos mandatos durarán hasta el 31 de Diciembre de 1934, debiendo tres de sus miembros pertenecer o haber pertenecido a la Comisión Honoraria del Impuesto a los Réditos y dos a la Comisión Honoraria del Impuesto a las Transacciones. Este Consejo dictará su reglamento interno, elegirá sus autoridades y propondrá al Poder Ejecutivo el nombramiento de gerente, quienes serán miembros del Consejo, pero sin voto.

La Dirección General se considerará, en cuanto a asuntos administrativos, como «entidad autónoma», quedando el Consejo plenamente facultado para designar y remover el resto del personal de la Dirección y resolver y aprobar todos los sueldos y gastos de la misma, como también organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Dirección. Anualmente, el Consejo elevará al Poder Ejecutivo el presupuesto de la Dirección para su aprobación.

Para la contratación de trabajos y suministros, cuyo monto exceda de \$ 5.000, se procederá, por regla general, al llamado de licitación pública, pudiendo sin embargo, el Consejo, mientras dura el período de organización, prescindir de esta formalidad, llamando a concurso de precios, forma que se aplicará también a las compras, etcétera, menores de pesos 5.000 y mayores de \$ 300. En los casos previstos por el artículo 33 de la ley 428, será facultad del Consejo autorizar y aprobar los contratos respectivos.

El Consejo tendrá amplias facultades para proponer previo dictamen de las comisiones honorarias las disposiciones que complementen o reglamenten la presente ley y las de los impuestos, las que entrarán en vigor una vez aprobadas por el Poder Ejecutivo. El Consejo podrá también impartir instrucciones, obligatorias para los contribuyentes, agentes de retención y demás responsables, con referencia a los plazos y formas de aplicación y percepción de los impuestos, de inscripción, de declaraciones juradas, de penalidades, de inspección y otras aclaraciones necesarias para la buena marcha de la administración de los impuestos, las que estarán en vigor mientras no sean derogadas por el mismo Consejo o por el Poder Ejecutivo.

Gerencia

Art. 3º — El gerente general atenderá especialmente la aplicación del impuesto a los réditos, sin perjuicio de las atribuciones de carácter general inherentes a su cargo y el gerente la del impuesto a las transacciones. El gerente general y el gerente se sustituirán recíprocamente en caso de ausencia o impedimento. A proposición del Consejo, el Poder Ejecutivo designará los funcionarios que a su vez deban substituirlos, en cuanto esta dispo-

sición no sea aplicable, especialmente con respecto a las subdirecciones de zonas a crearse por la Dirección General.

El gerente general o el gerente, respectivamente, ejercerá sus atribuciones por mandato del Consejo, salvo en los casos donde actúa en representación de la Dirección General como juez administrativo, para resolver sobre estimaciones y tasaciones de oficio, sobre la venta o volumen de transacciones imponibles, sobre el monto o el pago de impuestos y sobre la aplicación de multas, en cuyos casos sus resoluciones podrán ser modificadas por medio de los recursos que establece la presente ley.

Comisiones honorarias

Art. 4° — Cada comisión honoraria será compuesta de doce contribuyentes designados por decreto. Sus mandatos durarán hasta el 31 de Diciembre de 1934. Las comisiones tendrán la función de interpretar las disposiciones de la ley en los casos generales y de asesorar a la Dirección en los casos previstos en el artículo 9° y en los demás casos en que la Dirección lo requiera; y con este fin evacuarán por intermedio de la Dirección General las consultas de los contribuyentes con motivo de las cuestiones generales que suscite la aplicación del impuesto, o las consultas que formule la Dirección.

Sus interpretaciones, que se publicarán en el Boletín Oficial, se aplicarán en tanto no fuesen modificadas por el Departamento de Hacienda a raíz de la apelación de contribuyentes interesados interpuesta dentro de 15 días desde su publicación, o a requerimiento de la Dirección.

En las deliberaciones de las comisiones intervendrán, con voz pero sin voto, el gerente respectivo y los demás funcionarios que autorizará la Dirección.

Comisiones auxiliares

Art. 5° — La Dirección podrá designar contribuyentes para asesorarla o formar parte de comisiones honorarias encargadas de aconsejar las estimaciones de oficio y demás funciones semejantes, revistiendo estas misiones el carácter de carga pública.

CAPITULO II

De la determinación y percepción de los impuestos

Estimación y presunción

Art. 6° — En el caso de que una persona obligada a presentar declaración jurada por las leyes de los dos impuestos no haya cumplido con ese requisito dentro de los plazos respectivos o haya presentado una declaración que contenga datos que sean considerados como inexactos o que sea incompleta o si la persona carece de los libros o comprobantes legalmente exigibles por la Dirección, el gerente general, o el gerente, respectivamente, sin perjuicio de su derecho a aplicar las penalidades correspondientes, podrá citar a dicha persona para que comparezca dentro de un plazo que fijará, no menor de ocho días si el contribuyente está establecido en la Capital, de 15 días si lo está en las provincias y de un mes si lo está en los territorios nacionales, a contestar, por escrito o verbalmente y bajo juramento, las preguntas que le sean hechas sobre la renta o las transacciones u otros puntos que debiera contener la declaración.

También podrá, cuando una persona obligada a prestar declaración jurada se niegue a hacerla o cuando estando obligada a llevar libros no los tuviera o no los exhibiera, estimar de oficio la renta o las transacciones imponibles e intimar el pago del impuesto correspondiente, ya sea sobre la base del capital invertido, de las transacciones de períodos anteriores, de las compras efectuadas, de la existencia de mercaderías o del volumen y clase del negocio, ya sea sobre la base de la manera de vivir, del alquiler o del número y salarios del personal u otros datos o elementos de juicio que obren en poder de la Dirección o que deben proporcionar los agentes de retención, cámaras de comercio e industria, bancos, asociaciones gremiales o comisiones auxiliares y los que la Dirección obtenga por sus propios medios.

A los efectos de todo este artículo podrá tomarse como presunción general, salvo prueba en contrario, que los réditos netos de personas de existencia visible equivalen por lo menos a tres veces el alquiler que paguen o el que se les compute de acuerdo con el artículo 8° de la ley del impuesto a los réditos,

por el local de trabajo y el de su casa-habitación.

Art. 7° — Cuando el beneficio neto proveniente de actividades correspondientes a la 3ª categoría del impuesto a los réditos no pueda determinarse en forma clara y fehaciente por falta de antecedentes o por cualquiera otra circunstancia, la Dirección puede también proceder a la estimación de oficio, ateniéndose a este efecto, en cuanto fuera posible y conveniente, a la presunción, salvo prueba en contrario, que la utilidad mínima de los comerciantes o entidades respectivas será el 5 % anual sobre el capital efectivo que represente la empresa.

Art. 8° — La estimación de oficio se tendrá por firme, salvo que se rectifique a raíz de un recurso de oposición contra el impuesto resultante, interpuesto dentro de 15 días de la notificación de acuerdo al artículo 38. Si la estimación resultara inferior a la realidad, quedará subsistente la obligación del contribuyente de así denunciarlo y satisfacer el impuesto correspondiente al excedente, bajo pena de las sanciones de esta ley.

Art. 9° — La Dirección queda facultada para determinar, previo asesoramiento de la Comisión Honoraria del Impuesto a las Transacciones, los promedios, coeficientes y demás elementos y formas necesarios para fijar el valor de las transacciones de importación o exportación, a los fines de simplificar la aplicación del impuesto a las transacciones.

Verificación y fiscalización

Declaraciones e inspección

Art. 10. — La Dirección, cuando lo juzgue necesario, podrá exigir declaraciones juradas en las formas y plazos que fijará, no solamente de los contribuyentes sino también de los agentes de retención y terceros que interviniere en el pago, movimiento, destino o aplicación de los réditos y de las transacciones de un contribuyente.

La Dirección podrá exigir que se lleven ciertos libros especiales, salvo en los casos que los contribuyentes sean comerciantes matriculados y lleven libros rubricados en forma que haga fácil su fiscalización, o disponer que se conserven durante cinco años los libros, documentos y demás comprobantes, que justifiquen los réditos o el movimiento del negocio del con-

tribuyente o el proceder del agente de retención.

La Dirección podrá verificar en cualquier momento lo declarado o el cumplimiento de las demás disposiciones de esta ley y de las de los dos impuestos, inspeccionando libros y documentos de contabilidad y otros elementos de juicio. Igual medida podrá disponer contra el que se ocultase o negase a declarar o con los terceros si la indagación es necesaria para la investigación de infracciones en el curso de un sumario o para establecer el monto de los réditos o transacciones del contribuyente. Las constancias de dichos exámenes serán extendidas en actas que servirán de prueba en los juicios respectivos.

Las declaraciones juradas entregadas a la Dirección se tendrán por firmes de parte del declarante, pero se admitirán rectificaciones en casos de evidentes errores de cálculo o de concepto, siempre que no se produzcan a raíz de una inspección, efectuada o inminente, u observación de parte de la Dirección o denuncia presentada.

Auxilio de la fuerza pública

Art. 11. — El gerente general, o el gerente, respectivamente, y los demás funcionarios especialmente autorizados para estos fines por la Dirección, podrán requerir el auxilio inmediato de la fuerza pública cuando tropezasen con inconvenientes o resistencia en el desempeño de sus funciones, o cuando dicho auxilio fuese menester para hacer comparecer los sumariados y testigos. Cuando sea necesario recabarán del juez federal o letrado respectivo, orden de allanamiento, debiendo el juez despacharla dentro de las 24 horas, habilitando horas y días feriados necesarios. El auxilio de la fuerza pública deberá acordarse sin demora, bajo la exclusiva responsabilidad del funcionario que lo haya requerido.

En su defecto el funcionario o empleado policial responsable de la negativa u omisión incurrirá en la pena establecida por el Código Penal.

Percepción

Pagos a cuenta

Art. 12. — La Dirección puede exigir, dentro del año corriente y en límites que no podrán exceder de la cuarta parte de la renta

o transacción neta del año anterior en el caso de pagos trimestrales y de la mitad en los pagos semestrales, impares del importe correspondiente a cuenta del impuesto que corresponderá en definitiva sobre el rédito neto o las transacciones del año. El pago del sobrante a favor del fisco, que quedare, una vez notificado el impuesto definitivo, debe realizarse dentro de los 15 días de la notificación, salvo que la Dirección fijase en ésta otro plazo.

Compensación y devolución

Art. 13. — Cuando por los pagos hechos de acuerdo a las disposiciones de esta ley y de las leyes de los dos impuestos, quedare un sobrante a favor del contribuyente y tal hecho se compruebe en la Dirección, administrativamente, o si un contribuyente o agente de retención hubiese hecho pagos de impuestos indebidamente o en exceso, la Dirección efectuará directamente la compensación o acreditación respectiva, o, si lo estima necesario en atención al monto y a las circunstancias, procederá a la devolución de lo cobrado de más, en forma simple y rápida, a cargo de las cuentas recaudadoras.

Los saldos disponibles de las cuentas recaudadoras en el Banco de la Nación Argentina se entregarán diariamente a la Tesorería General de la Nación, con excepción de la cantidad de pesos 100.000 moneda nacional, que quedará permanentemente a disposición de la Dirección para atender los pedidos de devolución más urgentes.

Intereses

Art. 14. — El Poder Ejecutivo podrá disponer el pago de intereses sobre excedentes mayores de pesos 500 moneda nacional, con imputación a las cuentas de recaudación. El tipo de interés será el que se paga en plaza por depósitos en cuentas corrientes y será fijado por la Dirección.

Ingresos

Art. 15. — La percepción del impuesto a los réditos y del impuesto a las transacciones se efectuará sobre la base de declaraciones juradas y en la forma y plazos que la Dirección determinará.

La Dirección abrirá cuentas en bancos particulares y oficiales, cuando lo juzgue conveniente para facilitar la percepción. Los saldos de

estas cuentas se transferirán, en períodos no mayores de un mes, al Banco de la Nación.

En cuanto la ley del impuesto a las transacciones no haya previsto ya la intervención de agentes de retención, la Dirección, cuando lo considere conveniente, podrá obligar a actuar como tales a las personas que se designe en la reglamentación o en las instrucciones respectivas.

La percepción del impuesto a los réditos se efectuará en la misma fuente, siempre que ello sea posible y también en los casos y por personas no expresamente previstas en la ley respectiva, cuando la Dirección considere conveniente la intervención de agentes de retención.

Cuando en ciertos casos previstos por las leyes citadas la aplicación de las disposiciones respectivas a la percepción no sea de beneficio manifiesto para la recaudación, la Dirección podrá desistirse de la manera de percepción prevista en la ley, total o parcialmente, y disponer otras formas y plazos de ingreso, con la finalidad de simplificar y hacer menos oneroso el procedimiento, pero siempre que la recaudación no quedase perjudicada.

Cuando las leyes citadas, o la presente, o su reglamentación, dispongan o autoricen a disponer la intervención de agentes de retención, los contribuyentes no quedan eximidos de la obligación de ingresar el impuesto, en cuanto no existe o no puede existir agente de retención, o éste no cumple con sus obligaciones.

El pago del impuesto deberá efectuarse en el lugar del domicilio del contribuyente en el país o, en su ausencia, en el de su representante, salvo en cuanto a la percepción por retención, en cuyo caso deberá efectuarse en el domicilio del agente de retención.

Cuando haya varios domicilios o el domicilio no pudiera determinarse o no se conociese el del representante en ausencia del contribuyente, la Dirección fijará el lugar del pago.

CAPITULO III

De las penalidades, de la prescripción y de los responsables

Penalidades

Multas

Art. 16. — Los infractores a las disposiciones de esta ley y de las de los dos impuestos, a los reglamentos dictados por el Poder Ejecutivo, a

las instrucciones impartidas por el Consejo de la Dirección General y a las disposiciones administrativas de los gerentes, serán reprimidos con multa de pesos 25 moneda nacional a pesos 2.000 moneda nacional la primera vez, y con pesos 50 moneda nacional a pesos 4.000 moneda nacional en la sucesiva. Hasta que el Poder Ejecutivo declare terminado el período de organización de los impuestos, el gerente general o el gerente, respectivamente, podrá, en los casos de poca importancia, suspender la prosecución del sumario y dejarlo sin efecto, siempre que dentro de un plazo prudencial, a fijar por él, que no baje de 10 ni exceda de 30 días, el infractor regularice su situación.

Art. 17. — La negativa u oposición de hecho a permitir la inspección llevada a cabo por funcionarios debidamente autorizados, implica una infracción y será penada de acuerdo con las disposiciones del artículo anterior.

Art. 18. — Cualquier falsa declaración, acto u omisión que importen una violación a lo expresado en la presente ley, serán penados con una multa de hasta diez veces la suma que se ha dejado de oblar o pretendido defraudar, sin perjuicio de la responsabilidad criminal por delitos comunes.

Intereses punitivos

Art. 19. — Las multas en virtud de lo dispuesto en los artículos anteriores, deberán ser satisfechas por los responsables dentro de los quince días de quedar notificada y firme la resolución respectiva. En su defecto devengarán un interés punitivo del 1 % mensual, sin necesidad de interpelación alguna.

Art. 20. — Los impuestos o saldos de impuestos que no fueran satisfechos dentro de los plazos establecidos en la ley, reglamentos, instrucciones o intimaciones de pago, devengarán un interés punitivo del 1 % mensual, sin necesidad de interpelación alguna.

Art. 21. — El interés punitivo corre desde el vencimiento de los plazos respectivos, y en los casos de recursos interpuestos, en cuanto queden denegados. La Dirección podrá eximir del pago de este interés punitivo, total o parcialmente, siempre que lo considere justo.

Prórroga

Art. 22. — La Dirección podrá conceder, en casos especiales, prórrogas para el pago del

impuesto o penalidades ejecutoriados ante la Dirección, que no puede bajar del 5 % anual.

Prescripción

Art. 23. — La acción del fisco para exigir las declaraciones juradas, impugnar las efectuadas, practicar la estimación de oficio y requerir el pago de los dos impuestos e intereses punitivos, se prescribe a los diez años.

La acción para imponer multas por infracción o violación a esta ley y a la de los dos impuestos, la acción para hacerlas efectivas y las penas mismas, se prescriben a los cinco años.

Art. 24. — Las demandas contra el fisco por repetición de impuestos, sólo podrán hacerse cuando el pago haya sido efectuado por error de cálculo o concepto en las propias declaraciones del contribuyente o agente de retención, en cuyos casos la acción para demandar prescribe a los dos años del pago.

Responsables

Art. 25. — Son responsables del cumplimiento de las disposiciones de esta ley y de las leyes de los dos impuestos, los que están obligados a efectuar las declaraciones juradas o a ingresar el impuesto al fisco; y los terceros que, sin estarlo, contribuyan a facilitar su evasión por negligencia o culpa. Unos y otros son responsables, asimismo, en cuanto las penas pecuniarias y gastos del hecho, de sus factores, agentes o dependientes.

Son especialmente responsables, sin perjuicio de las obligaciones de los contribuyentes respectivos:

- a) El jefe de familia, tanto por sus rentas propias como por la de su esposa, si existe sociedad conyugal y los esposos viven juntos, y los de sus hijos menores que estén a su cargo y vivan con él;
- b) Los tutores, curadores o representantes legales de incapaces, los síndicos y liquidadores de las quiebras y concursos y los administradores legales o judiciales de las sucesiones;
- c) Los directores, gerentes y demás representantes de las entidades o compañías;
- d) Los mandatarios con facultad de administrar o percibir dinero;

e) En los casos previstos en la ley del impuesto a las transacciones artículo 2º, inciso 2º — compraventa de negocios — los rematadores, balanceadores e intermediarios que hayan intervenido en las transacciones respectivas y el comprador mismo;

f) En los casos de contribuyentes con domicilio fuera del territorio de la República: sus agentes, representantes, comisionistas y demás intermediarios, con respecto a las transacciones que se efectúan por su intermedio.

Art. 26. — Los representantes de las personas jurídicas, en el caso de omisiones o hechos que importen infracción o defraudación a las disposiciones de esta ley o de las leyes citadas, obligan a sus representados, las que son, solidariamente con ellos, responsables por el impuesto y las sanciones pecuniarias que correspondan.

CAPITULO IV

Del procedimiento administrativo

Sumario

Art. 27. — Todo acto u omisión que tenga por objeto infringir esta ley o las de los dos impuestos, será objeto de un sumario administrativo instruido por los funcionarios que determine la Dirección General.

Art. 28. — Dichos funcionarios constatarán el acto u omisión y lo consignarán en un acta, cuya copia entregarán al interesado. Dicha acta hará fe mientras no se pruebe su falsedad. Si el acto u omisión consignado resultara falso, sea maliciosamente o por negligencia grave, el funcionario que hubiere levantado el acta, será destituido, e incurrirá en las penas establecidas por el Código Penal.

Art. 29. — El acto u omisión podrá ser también constatado, en casos simples y claros, por diligencias internas de la Dirección, que demuestren la falta de cumplimiento de las disposiciones respectivas por parte del contribuyente o agente de retención.

Art. 30. — Labrada el acta, sea o no firmada por el interesado, se notificará al presunto infractor o defraudador y se le concederá plazo de diez días de la notificación para que alegue su defensa por escrito, proponiendo

o entregando las pruebas que hagan a su derecho.

El acta servirá de notificación a los efectos de este plazo, cuando de la misma conste claramente el acto u omisión punible y se deje constancia de haber notificado al interesado, de que se le ha concedido el plazo.

Art. 31. — El sumario no podrá durar más de 30 días y será secreto para todas las personas ajenas al mismo, pero no para las partes ni sus abogados.

Art. 32. — Practicadas las diligencias de prueba, quedará cerrado el sumario y el gerente general, o el gerente, respectivamente, dictará resolución motivada dentro de los 10 días siguientes.

Art. 33. — Las resoluciones serán notificadas a los interesados por medio de carta certificada, con aviso especial de retorno, remitiéndoseles, al mismo tiempo, copia íntegra de los fundamentos de aquéllas.

Art. 34. — Todas las demás citaciones, notificaciones, intimaciones de pago, etcétera, serán hechas por medio de carta certificada, con aviso especial de retorno, a cuyo efecto se convendrá con el Correo, la forma de hacerlo con la mayor urgencia y seguridad.

Si la citación, notificación, etcétera, no pudiera practicarse en la forma antedicha por no tener el contribuyente constituido domicilio, se efectuará por medio de edictos publicados durante cinco días en el Boletín Oficial, sin perjuicio de que también se practique la diligencia en el domicilio del contribuyente si éste fuere conocido.

Recurso de reconsideración

Art. 35. — De las resoluciones dictadas por el gerente general, o el gerente, respectivamente, en lo que se refiere a la aplicación de multas, podrá interponerse el recurso de reconsideración.

El recurso deberá deducirse ante la Dirección General dentro de los diez días de la notificación, personalmente o por medio de apoderado debidamente autorizado por escritura pública, o entregarse dentro del mismo plazo al Correo, en carta certificada con aviso especial de retorno. La tramitación del recurso interrumpe el término para ocurrir a la vía contenciosa.

Art. 36. — El gerente general, o el gerente, respectivamente, tomará en cuenta los hechos

alegados y ordenará las diligencias que correspondan. Con los nuevos elementos reunidos y todos aquellos que se considere necesarios, se dictará resolución motivada dentro de los diez días siguientes.

Art. 37. — La resolución dictada será notificada de inmediato al interesado. Si fuese favorable al recurrente, se procederá conforme a la resolución dentro de los quince días siguientes a la notificación. Si la resolución fuese contraria al recurrente, éste deberá regularizar su situación en el mismo plazo. Desde la notificación de la resolución queda expedita la vía judicial.

Recurso de oposición

Art. 38. — Los contribuyentes podrán también formular recurso de oposición al pago de impuestos a vencer, presentando la correspondiente reclamación ante la Dirección, con anterioridad a la fecha en que deben abonarse, sin que por la interposición del recurso se considere prorrogado el vencimiento del impuesto.

Art. 39. — Presentada la reclamación, el gerente general, o el gerente, según el caso, dictará, previas las diligencias que considere necesarias, la resolución administrativa correspondiente, dentro de los treinta días de su presentación.

Art. 40. — En la resolución se establecerá la improcedencia o procedencia del impugnado y en este último caso se determinará si el contribuyente debe abonar el impuesto a su vencimiento o dejar en suspenso — con o sin fianza — el pago, mientras dure la tramitación de la demanda contenciosa, pagando intereses de acuerdo con lo establecido por el artículo 22. A tal efecto se tendrá en cuenta si la naturaleza del impuesto u otras circunstancias concernientes a dicho pago hacen razonable la duda del contribuyente, procediéndose en la forma siguiente:

1º a) Cuando hubiere recaído resolución administrativa antes de la fecha del vencimiento del impuesto, por la que se declare procedente el pago, y no se estimare razonable la oposición deducida, se procederá, en caso de falta de pago al vencimiento del impuesto respectivo, a aplicar las penalidades que correspondan. Desde la notificación de la resolución, queda expedita la vía judicial;

b) Cuando la resolución administrativa que declare procedente el pago del impuesto cuestionado, fuere anterior a la fecha del vencimiento del mismo, y en ella se hubiere calificado como razonable la oposición en la misma resolución, se establecerá si el interesado, para ocurrir a la vía judicial, sin ser considerado en mora, deberá afianzar su pago o si éste quedará en suspenso a la fecha del vencimiento del impuesto.

A los fines expresados, la fianza deberá formalizarse dentro de los quince días posteriores al vencimiento del impuesto, procediéndose a aplicar en caso de incumplimiento o falta de pago, las penalidades que corresponda.

Si la resolución exime de la obligación de afianzar, dejando en suspenso el pago del impuesto, el término para ocurrir a la vía contenciosa correrá desde el día del vencimiento del impuesto, y desde la constitución de la fianza, en caso contrario;

2º a) Cuando la resolución administrativa se hubiere dictado después del vencimiento del impuesto, sin que hasta esa fecha se hubiese efectuado el pago, y no se considerase razonable la oposición, se aplicará en la misma resolución las penalidades pertinentes. Desde la notificación de la resolución, queda expedita la vía judicial;

b) Cuando la resolución administrativa que declare exigible el impuesto, fuere de fecha posterior al vencimiento del mismo, sin que se haya efectuado hasta entonces el pago, y se considere razonable la oposición, dispondrá, en caso de exigir afianzamiento del impuesto, se constituya la garantía dentro del perentorio término de quince días, bajo apercibimiento de considerarse en mora, en cuyo caso se procederá a aplicar las penalidades que correspondan. Desde la notificación de esta resolución, o desde la constitución de la fianza, queda expedita la vía judicial.

Cuando el pago se hubiere dejado

en suspenso, el término para ocurrir a la vía judicial correrá desde la fecha en que se notificare la resolución;

3° Cuando la resolución administrativa que declare exigible el impuesto fuere atacada, abonando el impuesto bajo protesta, quedará desde la fecha del pago expedita la vía judicial.

Art. 41. — Cuando sin deducir oposición previa al pago del impuesto, este fuere abonado a su vencimiento bajo protesta, el contribuyente podrá deducir este recurso dentro de diez días de la fecha del pago, procediéndose en lo demás de acuerdo con las disposiciones anteriores.

CAPITULO V

Del procedimiento judicial

Demanda contenciosa

Art. 42. — De las resoluciones condenatorias que dicte la Dirección General, como así también de las resoluciones que recaigan en los casos en que se haya deducido oposición al pago de los impuestos y siempre que el monto en cuestión fuera mayor de 100 pesos moneda nacional, los interesados podrán ocurrir ante el juez federal o letrado respectivo a deducir demanda contenciosa en contra del fisco nacional, en el perentorio término de quince días, vencidos los cuales sin haberse hecho uso de tal derecho, la resolución administrativa se tendrá por consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada, y el impuesto por definitivamente oblado o aduado.

Presentada la demanda ante el juez que corresponda, éste requerirá telegráficamente el expediente administrativo, el que deberá ser remitido dentro de las 24 horas subsiguientes.

Art. 43. — Previa agregación del expediente administrativo, se correrá traslado de la demanda, en calidad de autos y por el término de quince días, al representante del fisco, el que deberá oponer en contestación todas las defensas y excepciones que tuviese, las que serán resueltas conjuntamente con las cuestiones de fondo, en la sentencia definitiva.

Art. 44. — Si alguna de las partes lo solici-tase, se ordenará la recepción de la causa a prueba por un término que no excederá de treinta días, debiendo expresarse en el mismo auto, la fecha de su vencimiento.

La apertura a prueba sólo podrá solicitarse en la demanda y en la contestación.

Art. 45. — La prueba será recibida por el secretario del tribunal, siempre que alguna de las partes no pidiese que lo sea por el juez.

Cuando las diligencias hayan de practicarse fuera de la jurisdicción del juzgado, la comisión rogatoria será subscripta por el juez.

Art. 46. — Si el juicio no fuese abierto a prueba, los autos quedarán listos para sentencia, sin ninguna diligencia ulterior, previo nuevo traslado, por su orden, y por el término de seis días, a cada parte.

Art. 47. — Vencido el término de prueba, el secretario agregará de oficio la producida, y el juez dictará la providencia de autos, señalando un día, dentro de los diez días subsiguientes, durante los cuales las partes podrán examinar el proceso en secretaría, para informar sobre el mérito de la causa, in voce o por escrito, quedando con ello cerrada toda discusión, sin poderse presentar más escritos.

Art. 48. — Terminada la audiencia del artículo anterior, el juez examinará el proceso y pronunciará su sentencia dentro de los treinta días subsiguientes, a más tardar, salvo cuando se hubiera informado in voce, en cuyo caso la pronunciará en el acto.

La sentencia contendrá una relación de la causa que comprenda: el nombre de las partes, el objeto de ella, los hechos alegados (pudiendo, en cuanto a éstos, referirse a los escritos de las partes), el derecho aplicable, la resolución que sea su consecuencia y la condenación en costas, con regulación de los honorarios a cargo del vencido.

Art. 49. — Serán notificados por cédula, el auto de apertura a prueba, el que designe audiencia para la vista de la causa, y la sentencia definitiva.

Todas las demás providencias serán notificadas por nota, a cuyo efecto las partes deberán concurrir a secretaría a tomar conocimiento de los autos, los días que el juez designe.

El juez de la causa podrá comisionar a empleados de su dependencia para que dentro de la jurisdicción del juzgado, practiquen las notificaciones por cédula.

Art. 50. — De las sentencias dictadas por los jueces federales o letrados en los juicios contenciosos fiscales, en que el monto que manda pagar la sentencia importe una suma

superior a \$ 500 m/n., podrá interponerse recurso de apelación para ante la Cámara Federal respectiva dentro de los cinco días subsiguientes al de su notificación, el que será concedido en relación y en ambos efectos.

Art. 51. — Cuando el apelante sea el demandante y no compareciere ante el tribunal de 2ª instancia dentro de los cinco días subsiguientes al de la notificación de la primera providencia, se le tendrá de oficio por desistido del recurso, con costas, quedando confirmada la sentencia recurrida y pasada en autoridad de cosa juzgada.

Art. 52. — Corresponde al juez que haya conocido en la causa, la ejecución de las sentencias dictadas en ella y al de turno la de las ejecutoriadas ante la Dirección y se aplicará el procedimiento establecido en el título XXV de la ley federal número 50.

Art. 53. — Las sentencias dictadas en las causas previstas en esta ley, como las dictadas en las causas por ejecución de las mismas, son definitivas, pasan en autoridad de cosa juzgada y no autorizan el ejercicio de la acción de repetición por ningún concepto, sin perjuicio de los recursos que autorizan las leyes 48 y 4.055.

Art. 54. — En la sustanciación de las causas regidas por la presente ley, se aplicará supletoriamente, en lo adaptable, las disposiciones del Código de Procedimientos en lo Criminal para la Capital y territorios nacionales.

Art. 55. — En los casos de demanda contenciosa a que hace referencia la presente ley, el fisco será representado por los procuradores fiscales, quienes percibirán honorarios conforme a la regulación de ley, cuando los jueces condenaren a los demandados o apelantes, al pago de las obligaciones o multas respectivas.

Art. 56. — Las acciones podrán deducirse ante el juez de la circunscripción donde se halle la oficina recaudadora respectiva, o ante el domicilio del deudor, o ante el lugar en que se haya cometido la infracción o se haya aprehendido los efectos que han sido materia de contravención.

CAPITULO VI

De las disposiciones generales

Cargas públicas

Art. 57. — Las designaciones con carácter de carga pública deberán recaer siempre en

personas residentes en el lugar donde deban desempeñar sus funciones, sin que pueda obligárselas a efectuar viajes o cambios de domicilio, por razón del desempeño de las mismas.

Estas cargas públicas podrán renunciarse únicamente por causa justificada.

Domicilio

Art. 58. — Todo contribuyente o agente de retención que haya enviado una vez una declaración jurada u otra comunicación a la Dirección, está obligado a denunciar todo cambio de domicilio dentro de cinco días de efectuado, bajo las sanciones de esta ley por infracciones.

Sin perjuicio de esta disposición se reputará subsistente, a todos los efectos administrativos y judiciales, el último domicilio consignado en la declaración jurada, comunicación o escrito, mientras no se constituya otro.

Comunicaciones

Art. 59. — Todas las comunicaciones postales dirigidas a la Dirección General y viceversa, serán libres de porte.

Denunciantes

Fondo de estímulo

Art. 60. — La Tesorería General de la Nación depositará a fin de cada año el uno por mil de la recaudación del año, en una cuenta especial, a disposición de la Dirección, para servir como fondo de estímulo para los funcionarios y dependientes de la Dirección, no pudiendo los premios sobrepasar la mitad del sueldo de que gozó el premiado en el año respectivo. Se rendirá cuenta dentro de los 15 días de depositado, procediéndose en igual término a la devolución del sobrante, si lo hubiera, a la Tesorería General de la Nación.

Definiciones

Art. 61. — Se entiende por contribuyente los residentes dentro del territorio de la República y los que, sin estarlo, están obligados a oblar el impuesto de acuerdo con las disposiciones de esta ley o de las leyes citadas, su reglamentación, instrucciones y resoluciones respectivas. Las disposiciones del Código Civil sobre el carácter ganancial de los réditos de

los cónyuges no rige a los fines del impuesto a los réditos; el que se aplicará a cada cónyuge sobre el monto de sus propios réditos.

Las sucesiones se considerarán como un solo contribuyente hasta la división de la herencia.

Conversión

Art. 62. — Los réditos y las transacciones en especie u oro metálico, serán convertidos, a los efectos de la liquidación del impuesto, en su equivalente en moneda nacional al valor corriente en plaza, y los en moneda extranjera, al tipo oficial del Banco de la Nación, en el día del pago.

Sellado

Art. 63. — Quedan exentos del sellado de ley, todas las actuaciones y solicitudes de inscripcón, de aclaración, consultas sobre su situación, pedidos de instrucciones para la liquidación y pago, como, asimismo, los pedidos de certificados para escrituras públicas y los de acreditación, compensación y devolución de impuestos que formulen los contribuyentes y agentes de retención o sus representantes. Las reclamaciones contra intereses punitivos y contra pagos a cuenta y los recursos administrativos contra la determinación de la renta o transacciones imponibles, contra el impuesto aplicado, y contra las multas, quedan igualmente exentos.

Plazos

Art. 64. — Para todos los términos establecidos en la presente ley se computará únicamente los días hábiles.

Carácter reservado de las informaciones

Art. 65. — Las declaraciones juradas, manifestaciones o informaciones que el contribuyente o terceros presentasen a la Dirección, son estrictamente reservadas. Los funcionarios públicos y demás dependientes de la Dirección están obligados a mantener el más absoluto secreto de todo lo que llega a su conocimiento por el desempeño de sus funciones, sin poder comunicarlo a persona alguna, salvo sus superiores jerárquicos.

La falta de cumplimiento de esta disposición hará pasible al que la cometiera de las sanciones del Código Penal, sin perjuicio e indepen-

dientemente de las medidas administrativas que correspondan.

Los miembros de las comisiones honorarias o comisiones auxiliares o del Consejo, no podrán tener acceso a las declaraciones juradas y demás informaciones reservadas de los contribuyentes o a las de terceros que les afecten. El Poder Ejecutivo podrá fijar excepciones con respecto a miembros del Consejo, en cuanto sea indispensable para la buena marcha de la Dirección.

Art. 66. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sala de la comisión, Diciembre 28 de 1932.

Abraham de la Vega. — Belisario Albarracín. — Manuel A. Bermúdez. — José María Bustillo. — Raúl Godoy. — Pedro Groppo. — Héctor S. López. — José Heriberto Martínez. — Juan F. Morrogh Bernard. — Federico Pinedo. — Juan Simón Padrós.

Sr. de la Vega. — Pido la palabra.

El despacho que considera la Cámara es de carácter complementario y de aplicación de las dos leyes sobre impuestos a las transacciones y a los réditos, ya sancionados por ella.

Los mismos conceptos de simplicidad y al mismo tiempo de eficacia en la aplicación y percepción de los impuestos han orientado la tarea de la comisión en este despacho.

Como la Cámara se siente apremiada para hacer la mayor labor en esta sesión, procuraré ser lo más breve posible. Se trata de adoptar disposiciones referentes a la administración, percepción y procedimiento en materia de impuestos a los réditos y transacciones. La comisión ha creído conveniente, en vez de que se sancione un simple anexo general de las leyes ya votadas, tal como lo proponía el Poder Ejecutivo, propiciar una ley especial, aunque sea complementaria y de aplicación de las dos anteriormente citadas.

En la organización del mecanismo administrativo y en las reglas de aplicación de los conceptos legales que rigen la materia impositiva, la comisión ha contado con la colaboración de los miembros del Consejo de Administra-

ción de la Dirección General de los Impuestos a los Réditos y a las Transacciones, y en la parte que tiene atinencia con los procedimientos administrativos y especialmente judiciales con respecto a los reclamos de los contribuyentes, ha contado con la opinión de los fiscales federales, que han contribuido a la elaboración de los antecedentes de este proyecto, los cuales han sido expuestos verbalmente en la comisión por el fiscal federal doctor Jorge Gondra.

Para definir en un concepto general el alcance del proyecto cuya sanción aconseja la comisión, diré que el despacho es un término medio razonable y discreto entre las dos tendencias que definen en el mundo la aplicación del impuesto a los réditos entre el procedimiento esencialmente inquisitivo, que es la característica del impuesto en Alemania y especialmente en Prusia, y el procedimiento en el cual la fe del contribuyente es la base capital, como ocurre en Inglaterra.

La comisión, pues, al dotar a este organismo de todos los medios para averiguar el estado de las entradas gravadas y la seriedad y verdad de las declaraciones ha puesto en manos de los contribuyentes los medios de evitar errores o de obtener resoluciones que los dejen sin efecto en caso de que las autoridades administrativas lo hubieran cometido. Y debo decir que no hay sino reducidas prescripciones nuevas en el proyecto que actualmente considera la Cámara, pues la mayor parte de ellas están en vigencia en las actuales leyes de impuestos y que se trata de darles un carácter más complementario y preciso, y al mismo tiempo dar vigencia legal a disposiciones reglamentarias que en la práctica han sido aplicadas con eficacia.

Para concluir con este informe, que por la razón que he dado, debe ser sintético y breve, debo decir que hay dos novedades principales en este despacho. Una que significa la creación de un recurso desconocido en nuestras leyes fiscales; y otra, la eliminación de disposiciones que son consideradas perjudiciales.

La creación a que me refiero es el recurso administrativo, que naturalmente va hasta la vía judicial, que se califica con el nombre de oposición, en virtud del cual el contribuyente, antes de que le llegue la época del vencimiento del impuesto, puede presentarse a deducir ante la autoridad administrativa, con el recurso ante la vía judicial, oponiendo sus reparos al impuesto en la parte que le es pertinente, lo que significa un principio nuevo y excelente, de carácter preventivo, en beneficio del contribuyente y que le da los medios de poder defender sus derechos con mayor amplitud que en la forma muy estricta en que actualmente puede hacerlo cuando es demandado por la vía de apremio.

La supresión de disposiciones de la ley actual en vigencia es atinente a las denuncias, que la comisión aconseja a la Cámara eliminar para lo sucesivo. La razón principal que ha movido el criterio de la comisión es el carácter odioso de la denuncia, peligrosa tratándose de leyes que se aplican por primera vez en el país y que produce también un malestar hondo y hasta en muchos casos puede constituir una especie de incitación a acciones repudiables, especialmente cuando los denunciantes, como en la ley actual, pueden ser los mismos empleados públicos a quienes la ley da medios coercitivos para entrar en el domicilio o negocio del contribuyente y poder constatar la violación o infracción a base de procedimientos en que ellos tienen una participación conocida en las disposiciones represivas.

Creo que estas breves razones son suficientes para dejar bien en evidencia el propósito con que la comisión ha aconsejado el despacho que considera la Cámara y que ella puede sancionarlo en la seguridad de que se va a contribuir poderosamente a la aplicación correcta y eficaz de los impuestos de transacciones y réditos.

Nada más.

Sr. Presidente (Cafferata). — Se va a votar en general el despacho de la comisión.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Cafferata). — En consideración en particular.

—Sin observación se vota y aprueba el artículo 1º.

—En consideración el artículo 2º.

Sr. de la Vega. — Debido a la rapidez con que ha sido impresa esta orden del día, hay algunos errores que es menester salvar. Así en este artículo 2º, en el tercer párrafo, después de las cifras 5.000 y 300, hay que agregar «pesos moneda nacional». Hay, además, algunos errores de puntuación que la Secretaría podrá corregir cuando haga la comunicación al Honorable Senado.

Sr. Presidente (Cafferata). — Con la aclaración hecha por el señor diputado por Tucumán, se va a votar el artículo.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observación se vota y aprueba el artículo 3º.

—En consideración el artículo 4º.

Sr. de la Vega. — Pido la palabra.

En este artículo hay un error. Donde dice: «casos previstos en el artículo 9º», debe decir: «casos previstos en los artículos 2º, párrafo final y 9º».

Sr. Presidente (Cafferata). — Con esa aclaración, se va a votar el artículo.

—Se vota y aprueba el artículo 4º, así como el 5º.

—En consideración el artículo 6º.

Sr. de la Vega. — En este artículo, después de las palabras «declaración jurada», hay que agregar: «por esta ley o». De modo que quedaría en la siguiente forma: «En el caso de que una persona obligada a presentar declaración jurada por esta ley o por las leyes de los dos impuestos, no haya, etcétera».

Así quedan comprendidas las tres leyes que están directamente vinculadas entre sí.

Sr. Presidente (Cafferata). — Se va a votar el artículo 6º con la intercalación de las palabras que ha indicado el señor diputado por Tucumán.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observación se aprueban los artículos 7º a 11 inclusive.

—En discusión el artículo 12.

Sr. de la Vega. — Pido la palabra.

En el artículo 12 debe decir: «que no podrán exceder de la cuarta parte de la renta o transacciones netas», y luego por error dice «impares», debiendo decir «importes» a cuenta, etcétera, en adelante. Es un error material.

Sr. Secretario (Zambrano). — Se substituye la palabra «impares» por «importes».

Sr. Presidente (Cafferata). — Queda aprobado con las correcciones indicadas por el señor diputado por Tucumán.

—Se aprueban los artículos 13 a 15 inclusive.

—En discusión el artículo 16.

Sr. Escobar. — Pido la palabra.

Deseo consultar al señor miembro informante de la comisión si ahora sería la oportunidad de intercalar al final del capítulo 3º el artículo que voy a proponer, o si más bien correspondería al final del capítulo 6º sobre disposiciones transitorias.

El artículo sería el siguiente: «Exoneránse de toda multa e intereses punitivos o cualquier otra carga en que hubieren incurrido los contribuyentes a condición de que regularicen su situación dentro del término de noventa días a contar de la promulgación de la presente ley».

Las leyes a las transacciones y a los réditos son experimentales, y la prueba está en que estamos modificando las que sancionamos este año, teniendo en cuenta sus resultados prácticos.

El impuesto a los réditos ha sido una nueva carga echada sobre el contribu-

yente como una exigencia de la crisis gravísima que afecta la economía y las finanzas de la Nación. Constituye, dentro de nuestro sistema constitucional, el recurso extraordinario que autoriza la Constitución nacional. El pueblo ha debido aceptarlo como un verdadero sacrificio y lo sobrelleva agravado con los enormes inconvenientes que ofrece su novedad y la complicación de sus disposiciones.

El impuesto a la renta en las sociedades y civilizaciones viejas funciona con regularidad por razones fundamentales, entre otras el sistema rentístico fiscal en que acciona y la educación de los contribuyentes hecha en larga práctica, pero entre nosotros, como he dicho, la novedad ha sorprendido a muchos y se ha incurrido en involuntarias infracciones por lo que correspondería se declarara por ley la exención de toda multa en razón de las causas expuestas. (¡Muy bien! ¡Muy bien!).

No se si corresponderá tratarlo ahora o al final.

Sr. Pinedo. — Al final.

Sr. Escobar. — Entonces que quede reservado en Secretaría.

Sr. Presidente (Cafferata). — Quedará reservado para el final, señor diputado.

—Sin observación se aprueban los artículos 16 a 24, inclusive.

—En consideración el artículo 25.

Sr. de la Vega. — Pido la palabra.

En la última parte del párrafo primero hay un error tipográfico, debe decir: «Unos y otros son responsables, asimismo, en cuanto a las penas pecuniarias», etcétera. Por error se ha omitido la palabra «a».

Además, el apartado e) se refiere al artículo 3º, en lugar del artículo 2º inciso 2º, como figura por error en el despacho impreso. Corresponde a la nueva numeración que resulta por la sanción de la Cámara sobre impuesto a las transacciones.

Sr. Presidente (Cafferata). — Se va a votar el artículo con las aclaraciones

formuladas por el señor diputado por Tucumán.

—Se aprueba el artículo en la siguiente forma:

Responsables

Artículo 25. — Son responsables del cumplimiento de las disposiciones de esta ley y de las leyes de los dos impuestos, los que están obligados a efectuar las declaraciones juradas o a ingresar el impuesto al fisco; y los terceros que sin estarlo, contribuyan a facilitar su evasión por negligencia o culpa. Unos y otros son responsables, asimismo, en cuanto a las penas pecuniarias o gastos del hecho de sus factores, agentes o dependientes.

Son especialmente responsables, sin perjuicio de las obligaciones de los contribuyentes respectivos:

- El jefe de familia, tanto por sus rentas propias como por la de su esposa, si existe sociedad conyugal y los esposos viven juntos, y los de sus hijos menores que estén a su cargo y vivan con él;
- Los tutores, curadores o representantes legales de incapaces, los síndicos y liquidadores de las quiebras y concursos y los administradores legales o judiciales de las sucesiones;
- Los directores, gerentes y demás representantes de las entidades o compañías;
- Los mandatarios con facultad de administrar o percibir dinero;
- En los casos previstos en la ley del impuesto a las transacciones artículo 3º (compraventa de negocios): los rematadores, balanceadores e intermediarios que hayan intervenido en las transacciones respectivas y el comprador mismo;
- En los casos de contribuyentes con domicilio fuera del territorio de la República: sus agentes, representantes, comisionistas y demás intermediarios, con respecto a las transacciones que se efectúan por su intermedio.

—Sin observación se aprueban los artículos 26 a 59.

Sr. de la Vega. — Aquí corresponde eliminar del despacho la palabra «denunciantes», que por error figura en la orden del día.

Sr. Presidente (Cafferata). — Que- da suprimida la palabra «denunciantes».

—Sin observación se aprueban los artículos 60 y 61.

—En consideración el artículo 62.

Sr. de la Vega. — A los efectos de la mayor precisión en este artículo, la comisión solicita que, en la parte final donde dice «en moneda extranjera al tipo oficial del Banco de la Nación en el día del pago», diga: «en moneda extranjera al tipo oficial de venta de divisas por el Banco de la Nación en el día del pago.»

Sr. Pinedo. — Se cambia la palabra «del» por «de venta de divisas por el».

Sr. Presidente (Cafferata). — Se va a votar el artículo con la modificación propuesta por el señor diputado por Tucumán.

—Se vota y es aprobado.

—Sin observación, se aprueban los artículos 63, 64 y 65.

Sr. de la Vega. — Pido la palabra.

En nombre de la comisión voy a solicitar que se incorpore un artículo que vendría a ser artículo 66 en este orden, y que contendría la siguiente disposición, con el mismo alcance de las disposiciones análogas ya sancionadas por la Cámara cuando se trató la ley sobre impuesto a los réditos. Diría así:

«La presente ley se considerará como complementaria y aclaratoria de las leyes 11.586 y 11.587, en cuanto no exista liquidación o pago definitivo del impuesto a los réditos percibidos o devengados en 1932 y a las transacciones efectuadas en igual período, y sustituirá a las leyes mencionadas a partir del 1º de Enero de 1933.»

Como artículo final propongo el siguiente, que es de práctica: «Deróganse las disposiciones que se opongan a la presente ley».

Sr. Escobar. — Pido la palabra.

Antes del artículo final que acaba de proponer el miembro informante de la comisión, correspondería votar el artículo que yo he propuesto y que cuenta con el asentimiento de la comisión.

Sr. de la Vega. — Podría considerarse primero el artículo 66 que propuse, después el propuesto por el señor diputado, y luego la disposición final.

—Ocupa la Presidencia el vicepresidente 1º, doctor Héctor S. López.

Sr. Escobar. — Una vez votado el artículo 67, deseo formular una observación y desde ahora pido la palabra.

Sr. Presidente (López). — Se considerarán por su orden las proposiciones formuladas.

Sr. Secretario (Zambrano). — La comisión propone como artículo 66 del proyecto el siguiente: «La presente ley se considerará como complementaria y aclaratoria de las leyes 11.586 y 11.587, en cuanto no exista liquidación o pago definitivo del impuesto a los réditos percibidos o devengados en 1932 y a las transacciones efectuadas en igual período, substituirá a las leyes mencionadas a partir del 1º de Enero de 1933.»

Sr. Presidente (López). — Está en consideración el artículo propuesto por el señor diputado.

—No haciéndose observación, se vota y aprueba el artículo propuesto.

Sr. Presidente (López). — Este artículo quedará como artículo 66.

Se va a leer por Secretaría un nuevo artículo que ha propuesto el señor diputado Escobar, que llevaría el número 67.

Sr. Secretario (Zambrano). — El nuevo artículo propuesto por el señor diputado Escobar dice: «Exonérase de toda multa e intereses punitivos o cualquier otra carga en que hubieren incurrido, a los contribuyentes, a condición de que regularicen su situación dentro del término de noventa días a contar de la promulgación de la presente ley».

Sr. Presidente (López). — Está en consideración.

Sr. Escobar. — La comisión acepta.

Sr. Pinedo. — Noventa días, me parece que es un plazo excesivo.

Sr. Escobar. — Es el término usual en estos casos.

Sr. Presidente (López). — Se va a votar el artículo propuesto por el señor diputado Escobar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (López). — Queda aceptado el artículo.

Sr. Escobar. — Pido la palabra para pedir una reconsideración sobre el artículo 23.

Pido que el plazo de diez años para la prescripción que se ha establecido en el primer párrafo de este artículo sea reducido a cinco años.

Sr. Presidente (López). — En consideración la moción de reconsideración formulada por el señor diputado por Buenos Aires respecto al artículo 23.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (López). — Por Secretaría se va a leer en qué consiste la modificación propuesta.

Sr. Secretario (Zambrano). — El señor diputado Escobar propone que el artículo 23 quede en la siguiente forma:

Art. 23. — Se prescribe a los 5 años: a) La acción del fisco para exigir las declaraciones juradas, impugnar las efectuadas, practicar la estimación de oficio, y requerir el pago de los dos impuestos e intereses punitivos. b) La acción para imponer multas por infracción o violación a esta ley y a la de los dos impuestos, la acción para hacerlas efectivas y las penas mismas.

Sr. Presidente (López). — Se va a votar el artículo 23 en la forma propuesta por el señor diputado Escobar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (López). — Queda aceptado el artículo en esa forma.

Se va a leer por Secretaría un nuevo artículo propuesto por la comisión, que llevaría el número 68.

Sr. Secretario (Zambrano). — El artículo dice: «Deróganse las disposiciones que se opongan a la presente ley».

—No haciéndose observación, se vota y aprueba el artículo.

Sr. Presidente (López). — Queda aceptado.

Sr. Gómez. — Pido la palabra.

La ley de impuesto a los réditos que acaba de aprobarse en reemplazo de la número 11.586, ha convertido a los gobiernos de provincia y a las municipalidades en recaudadores, en agentes, para el cobro del impuesto a los réditos. Ahora esta otra ley crea un organismo o dirección que va a encargarse de la aplicación de aquellos, con facultades de establecer multas, etcétera como lo indica el capítulo 3º, integrado con extensas disposiciones sobre responsabilidades, algunas de carácter muy graves.

No tengo necesidad de abundar en los inconvenientes que pueden resultar de esta ley con la actividad del organismo autónomo fiscal que va a tener imperio sobre los recaudadores del impuesto, cuando éstos sean gobiernos de provincias, y sobre las municipalidades de acuerdo con el artículo 25. Entiendo que no es esta la oportunidad de extenderme en un discurso doctrinario para establecer cuáles son los principios generales de nuestra organización política, principios que todos los señores diputados conocen. Por esto voy a ahorrar a la Cámara el dar los fundamentos de mi moción. Me basta apelar a la circunstancia de que el orden de la discusión de esta materia fiscal, del presupuesto e impuestos, ha producido el caso de que casi todo el quórum existente hoy en esta Cámara esté compuesto por hombres de las provincias cuyo apoyo descuento. Falta la izquierda compuesta en gran parte por hombres de la Capital Federal.

En síntesis, propongo el siguiente artículo: «Los gobiernos provinciales

y municipales no están comprendidos en las responsabilidades del capítulo tercero.»

Sería realmente bochornoso asistir a un conflicto entre esta dirección fiscal que va a aplicar los impuestos y un gobierno de provincia o municipalidad. Si alguna reclamación se produjera contra los gobiernos aludidos, como empleadores, estarían las relaciones establecidas entre los poderes nacional, provinciales o municipales, pero no la acción aislada de organismos que se crean con un fin exclusivamente administrativo.

Sr. Pinedo. — Pido la palabra.

No hay duda que nadie piensa poner penas especiales para los gobiernos de provincia...

Sr. Gómez. — Nadie piensa, pero las ponen...

Sr. Pinedo. — Un momento, señor diputado. Vamos a aceptar el agregado, pero ello sea después de decir que esto no es una incitación a los gobiernos provinciales para que no cumplan con las leyes nacionales ni para que se eximan de retener lo que está obligado a retener todo empleador.

Sr. Gómez. — El Congreso no puede dictar una ley que admita esa posibilidad. Si el señor diputado lee el inciso d) del artículo 25, verá que él constituye un instrumento del cual podría hacer uso indebido un gobierno prepotente.

Sr. Pinedo. — Vamos a aceptar el agregado, pero con la salvedad de que él no puede interpretarse como una derogación de lo anterior, ni como una incitación a los gobiernos provinciales a no cumplir la ley.

Sr. Presidente (López). — Se va a votar el agregado propuesto por el señor diputado por Corrientes y aceptado por la comisión.

—Se vota: «Artículo 69. — Los gobiernos provinciales y municipales no están comprendidos en las responsabilidades del capítulo III», y resulta afirmativa.

—El artículo 70 es de forma.

Sr. Simón Padrós. — Pido la palabra.

Deseo pedir la reconsideración del inciso g) del artículo 20 de la ley de réditos, donde por un simple error de redacción se dice: «Las comisiones o garantías que abonen»... En realidad debe decir: «Las comisiones de venta o de garantía que se abonen», ya que garantía no se abona ninguna.

Sr. Presidente (López). — Se va a votar si se reconsidera el inciso g) del artículo 20.

—Resulta afirmativa.

—Se vota como inciso g) del artículo 20: «Las comisiones de venta o de garantía que se abonen», y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (López). —Queda sancionado.

9

MOCION

Sr. Escobar. — Hago moción para que las sanciones se comuniquen de inmediato al Honorable Senado.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (López). — Habiendo asentimiento, así se hará.

Sr. Groppo. — Para terminar con los despachos de la Comisión de Presupuestos corresponde tratar la orden del día 95.

10

IMPUESTO A LOS REDITOS Y TRANSACCIONES

Impresos certificados

1

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha tomado en consideración el mensaje y proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo,

sobre impuesto a los réditos y transacciones; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja la sanción del siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Agréguese al artículo 3º de la ley número 11.585 el siguiente apartado: «En la Capital Federal y en los territorios nacionales entenderán en estas causas únicamente los jueces federales y letrados respectivamente, sin excepción, aún en los casos de juicios universales. En las provincias sólo serán competentes los jueces de sección.»

Art. 2º — Substitúyese el artículo 4º de la misma ley por el siguiente: «No se extingue la acción ni la pena pecuniaria emergente de la defraudación de impuesto o de la infracción a las disposiciones de las leyes de impuestos, por la muerte del responsable, las que deberán deducirse sobre los bienes del causante, o de sus herederos, cuando hubiesen aceptado la herencia pura y simplemente.»

Art. 3º — Agrégase al artículo 5º de la misma ley los dos siguientes apartados: «Ampliase la jurisdicción y competencia de los juzgados de sección en lo civil y comercial de la Capital Federal para que, con el juez de sección en lo criminal y correccional de la Capital, entiendan sucesivamente, por turnos de diez días cada uno en las causas concernientes a impuestos.

«En cada uno de los juzgados de sección y letrados habrá una secretaria para la radicación de las causas concernientes a impuestos y contravenciones e infracciones contra las leyes de impuestos, a cuyo efecto en la Capital, la secretaria de cartas de ciudadanía y la creada por esta ley, pasarán a depender de los juzgados federales en lo civil y comercial, y en los juzgados de sección del interior de la República y letrados de territorios se destinarán a ese efecto, las secretarías electorales, sin perjuicio de sus funciones actuales.»

Art. 4º — Las disposiciones de los artículos 26 y 42 a 56 de la ley sobre administración, percepción y procedimiento en materia de los impuestos a los réditos y a las transacciones regirán para el trámite de las causas sobre impuestos y multas de las leyes de aduanas y de internos, y quedan derogadas todas aque-

llas disposiciones legales que se opongan a su cumplimiento.

Art. 5º — Comuníquese, etc.

Sala de la comisión, Diciembre 28 de 1932.

Abraham de la Vega. — Belisario Albarraçin. — Manuel A. Bermúdez. — José María Bustillo. — Raúl Godoy. — Pedro Groppo. — Héctor S. López. — José Heriberto Martínez. — Juan F. Morrogh Bernard. — Federico Pinedo. — Juan Simón Padrós.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1932.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a vuestra honorabilidad, a fin de ser tratados en este período extraordinario de sesiones los siguientes asuntos:

Proyecto de ley general con los tres siguientes anexos:

- Impuesto a los réditos en substitución de la ley 11.586;
- Impuesto a las transacciones en substitución de la ley 11.587; y
- Sobre administración, percepción y procedimiento en materia de los impuestos a los réditos y a las transacciones.

Vuestra honorabilidad sancionó en el curso de este año las leyes 11.586 y 11.587. Puestas en aplicación por el Departamento de Hacienda, a poco de ser experimentadas se observó las deficiencias de que adolecían algunas de sus disposiciones. Dichas deficiencias repercuten en la recaudación y por consiguiente alteran el propósito fiscal que las originó.

No obstante estas dificultades la importancia de las sumas recaudadas hasta ahora dan una clara idea del rendimiento de estos impuestos, rendimiento que se aseguraría con las medidas que se proponen.

Tasas uniformes y de mayor equidad para los contribuyentes, seguridad y garantías en el control, sanciones rápidas y severas, normas más amplias y elásticas complementadas con un régimen de autonomía para la administración recaudadora, darían la solución a las actuales dificultades. La corta pero intensa experiencia adquirida hasta la fecha dicta esas medidas.